

El partido de la U y la fractura entre las elites colombianas

Por: María Clara Torres Bustamante. Politóloga. Investigadora de CINEP.
mctorres@cene.org.co

El actual gobierno constituye una experiencia relativamente exitosa por vincular los diferentes sectores de la dirigencia colombiana en torno a un proyecto político común. En ese sentido, la presidencia de Álvaro Uribe representa un intento por superar los débiles vínculos que han prevalecido en Colombia entre las elites regionales y el gobierno central.

Indudablemente, el Partido de la U es uno de los ejemplos que mejor ilustra los esfuerzos del Ejecutivo por agrupar a diferentes sectores políticos en torno a su proyecto político. Ideado en 2005 por Álvaro Uribe, entonces candidato-Presidente, "la U" es actualmente el partido de la coalición de gobierno con más escaños en el Senado de la República. Reúne a un conglomerado heterogéneo de barones electorales regionales de origen liberal y a una pequeña minoría bogotana de corte neoliberal y tecnocrática.

Sin embargo, las tensiones surgidas al interior del partido expresan claramente los límites de esta amplia asociación inter-élite. Temas como la influencia de los paramilitares en la vida política y la segunda reelección presidencial se han vuelto particularmente espinosos dentro de dicha colectividad, al tiempo que reeditan las viejas fracturas entre las elites provinciales y capitalinas.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera: en la primera sección, se subraya la histórica incapacidad de los sectores dirigentes colombianos por mantener un proyecto político común y se hace énfasis en el carácter societal, privado y regional de las estrategias contrainsurgentes. En la segunda, se sugiere que la política de Seguridad Democrática constituye un esfuerzo por "estatalizar" la contrainsurgencia y por sintonizar los intereses de las elites regionales y las del gobierno central, sin que ello signifique mayores avances en el mantenimiento de las garantías democráticas. En la tercera y última sección, se analiza la actual coyuntura a partir de los conflictos suscitados dentro del Partido de la U, con el ánimo de desentrañar cuán compacta es esta coalición inter-élite que soporta al gobierno Uribe desde el Congreso.

La contrainsurgencia societal y regional

Para construir el argumento de este texto, es necesario explicitar brevemente algunos antecedentes de la relación entre las elites regionales y los gobiernos centrales en cuanto se refiere a la lucha contrainsurgente.

Contrariamente a otros países de América Latina, como Perú y Argentina, en Colombia la contrainsurgencia se ha caracterizado por tener un marcado acento regional y por la ausencia del Estado como protagonista central de esta empresa. Por supuesto, esto no excluye la activa participación de agentes estatales en la lucha contra las guerrillas. Más bien, esto significa que, ante la incapacidad del Estado de afirmar su autoridad en amplias porciones del territorio nacional, ha cedido el oficio de la contrainsurgencia a actores privados. El Estado aparece así como un actor más en la intrincada amalgama de la contrainsurgencia, no como el protagonista principal.

Y el Estado colombiano no es el agente más importante de la pacificación de la sociedad porque encarna tan solo un actor más en la configuración del poder regional. Cabe aquí la reiterada afirmación de Teófilo Vásquez según la cual en Colombia “hay más política que Estado”.

Así las cosas, la composición de los grupos contrainsurgentes varía según la sociedad regional en la cual se inscriben y de acuerdo con el tipo de elites existentes allí. En particular, la creación de alianzas regionales entre cuadros de los partidos tradicionales, sectores de las fuerzas de seguridad, narcotraficantes y elites agrarias ha creado un explosivo cóctel molotov.

Estas asociaciones han cobrado especial importancia cuando los gobiernos centrales han promovido negociaciones de paz con las guerrillas. La multiplicidad de pactos secretos suscritos entre políticos y comandantes de las autodefensas mientras se desarrollaba el proceso de paz Pastrana-FARC da cuenta de ello (consúltense los pactos de Necoclí, Chivolo, San Ángel y Ralito).¹ En dichas coyunturas, sectores de las Fuerzas Armadas desafiaron al gobierno central y se aliaron con las elites regionales en su intento por socavar los diálogos con la insurgencia.

El modelo societal, ilegal y regional de contrainsurgencia refleja así la fragmentación de los sectores dirigentes y sus débiles vínculos con el Estado y el gobierno central. Según Mauceri, esto se explica porque en Colombia las clases dirigentes tienen un carácter e identidad profundamente regionales, ligadas a la actividad económica específica de cada zona (ganadería, petróleo, café, arroz, banano y coca). El mismo autor sugiere que, si bien existen importantes conexiones entre las elites involucradas en estas actividades, cada sector tiene su propia estructura. En esa misma dirección, Mauceri arguye que “la base económica heterogénea y la diversidad regional de las elites colombianas han hecho históricamente difícil el planteamiento de un proyecto político común”.²

La “estatización” de la contrainsurgencia

La presidencia Uribe Vélez representa tanto una opción de mano dura para combatir a las guerrillas, como un intento por convertir al Estado en el protagonista principal de la pacificación. Esto implica sintonizar los intereses de las elites rurales con el gobierno central, aún si esto no implica una mayor profundización de las garantías democráticas.

Contrasta notablemente ver de qué manera los caciques regionales liberales y conservadores que durante el gobierno Pastrana suscribieron pactos secretos con los comandantes de las autodefensas se aglutinaron luego al interior de los nuevos

¹ Hemos registrado un total de doce pactos firmados entre 1998 y 2002.

² Mauceri, Philip, “Estado, elites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú” en *Revista Colombia Internacional*, número 52, mayo-agosto de 2001, Universidad de los Andes, Bogotá. p.59.

partidos *uribistas* para participar a plena luz del día en la coalición mayoritaria de gobierno en el Congreso.

Así, además de fortalecer los nexos con los poderes regionales, la “estatización” de la contrainsurgencia pasa también por dotar a las Fuerzas Armadas de mayores recursos y capacidades para combatir a la guerrilla. Como lo muestra un estudio adelantado por Fedesarrollo, el actual gasto en defensa y seguridad es el más alto de la historia colombiana. El documento señala que en 1990 ese renglón representó 2.1% del PIB, en 2000 pasó al 3.5% y en 2004 trepó al 4.5%. El aumento en el pie de fuerza también ha sido notable. El mismo estudio muestra que Colombia cuenta actualmente con 790 miembros de la Fuerza Pública por cada 100.000 habitantes, proporción muy superior a la de 580 que había a inicios de la década de los noventa.

De este modo, la estatización consiste en alinear al gobierno central, a las Fuerzas Armadas y a las elites regionales en la lucha contrainsurgente. En otras palabras, esto significa garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas hacia el gobierno central, de modo que éstas no “le hagan la vuelta” exclusivamente a las elites rurales. Implica igualmente cerrar cualquier posibilidad de diálogo con la guerrilla. Por supuesto, todo esto con un amplio apoyo de la población civil.

El anterior escenario se parece más al modelo contrainsurgente de tipo autoritario y “estado-céntrico” adoptado por Fujimori en el Perú, que a la contrainsurgencia societal, regional y privada que había prevalecido en Colombia hasta ahora.³ Por lo demás, vale la pena señalar que ambos modelos significaron trágicos costos para la población civil: las masacres, las torturas y las desapariciones forzadas han estado a la orden del día en ambos casos.⁴

Así las cosas, la presidencia de Álvaro Uribe logra vincular a las élites regionales a su proyecto político, y por esa vía, consigue fortalecer las relaciones entre los poderes regionales y el gobierno central. Por un lado, obtiene el apoyo efectivo de los caciques regionales de origen liberal y conservador, que no pueden sobrevivir en la oposición sin las dádivas que proporciona la burocracia nacional al mantenimiento de sus caudales electorales en las regiones. Y por el otro, se favorece con el respaldo de las élites bogotanas de corte más neoliberal, tecnocrático y con “ínfulas modernizantes”.

Como veremos en la siguiente sección, el aparente consenso entre élites capitalinas y provinciales en torno a la política de Seguridad Democrática aún reviste importantes matices, que van desde la opción contrainsurgente “a secas” hasta una abierta complicidad con los paramilitares.

Las tensiones al interior del Partido de la U

En las elecciones de 2006, el *uribismo* se convirtió en la fuerza mayoritaria del Senado de la República, al obtener un total de sesenta y un escaños, de los cuales “la U” acaparó la mayor porción individual con un total de veinte curules.

³ Para una ampliación de ambos modelos contrainsurgentes, véase: Mauceri, Philip, “Estado, elites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú” en *Revista Colombia Internacional*, número 52, mayo-agosto de 2001, Universidad de los Andes, Bogotá. p.44-64.

⁴ *Ibid.*, p.62

Esta colectividad ha sido fuertemente cuestionada debido a los vínculos que algunos de sus miembros mantienen con los paramilitares. Seis de sus congresistas están siendo investigados y dos de ellos ya están en la cárcel.⁵

Y precisamente uno de los que está privado de la libertad, Carlos García Orjuela, era, ni más ni menos, el presidente del partido y tuvo que renunciar a esa distinción. Su detención ocurrió después de que la Corte Suprema de Justicia obtuviera testimonios de acuerdo con los cuales García Orjuela habría suscrito en 2001 un pacto con los comandantes del Bloque Tolima para gestionar proyectos de inversión social en sus zonas de influencia, a cambio de un respaldo político de esos grupos ilegales.⁶

Como lo ha venido registrando la prensa, la situación no es nada alentadora para las huestes del Presidente en el Congreso. García Orjuela es el quinto jefe de un partido uribista investigado por vínculos con la *parapolítica*. Los otros son Luis Alberto Gil, de Convergencia Ciudadana; Álvaro Araújo, de Alas Equipo Colombia; Dieb Maloof, de Colombia Viva, y Mario Uribe, de Colombia Democrática (recientemente absuelto por la Fiscalía). Sólo Cambio Radical no acusa golpes en su cúpula, pero tiene a diez congresistas judicializados por esta razón. García Orjuela es así mismo el tercer ex presidente del Congreso preso por iguales motivos.⁷

El fenómeno de la *parapolítica* ha ahondado las fracturas al interior del Partido de la U. La colectividad está hoy dividida entre un sector mayoritario, liderado por Carlos García Orjuela, Zulema Jattin (senadora cordobesa también investigada) y Jorge Visbal Martelo, ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, y una minoría disidente integrada básicamente por las congresistas capitalinas Martha Lucía Ramírez y Gina Parody, de corte más tecnocrático y neoliberal.

Los puntos de quiebre en el seno de esta amplia coalición interélite, bien representada en el Partido de la U, son fundamentalmente dos asuntos: la influencia del paramilitarismo en la vida política y la reelección presidencial de Uribe. La disidencia ha criticado que el partido se hubiera negado sistemáticamente a “modernizarse” y a romper con las prácticas clientelistas. Ramírez afirma que “El Partido de la U está en la picota pública por cuenta de su presidente” y enseguida advierte sobre la necesidad de “tomar medidas para evitar la contaminación de la política por parte de las mafias. Lamentablemente son muy pocos en la U –sostiene– a los que les preocupa ese desprestigio o se dan cuenta de que existe. Están demasiado atentos a la figura del Presidente, a que los cubra la buena imagen del Presidente, lo que ha permitido cierto grado de impunidad política”.⁸

Mientras el combo liderado por García Orjuela se hizo responsable de toda la logística destinada a recolectar cinco millones de firmas que permitan convocar a un referendo que dé vía libre a una segunda reelección de Álvaro Uribe, las senadoras bogotanas se apartaron de tal iniciativa. Pese a su fuerte talante uribista, las dos fogosas líderes se oponen a un tercer mandato del Presidente por considerarlo “perjudicial para la institucionalidad”.⁹

⁵ Datos Indepaz. Véase: www.indepaz.org.co (15 de agosto de 2008).

⁶ Los comandantes paramilitares fueron posteriormente asesinados. El Tiempo, 25 de julio de 2008.

⁷ El Tiempo, 25 de julio de 2008 y El Tiempo 28 de julio de 2008. pag 1-4.

⁸ El Tiempo, 28 de julio de 2008, pag 1-6.

⁹ El Tiempo, 28 de julio de 2008, pag 1-6.

Sin embargo, la minoría disidente comparte con sus compañeros de bancada la simpatía por el modelo contrainsurgente adoptado por Uribe. La senadora Ramírez sostiene: “estoy totalmente comprometida con su política de seguridad democrática [la de Uribe] porque la diseñé bajo su dirección, con el valor agregado adicional de que quisiera meter al país en los temas del siglo XXI: ciencia, tecnología, innovación, competitividad, desarrollo global”.¹⁰

En el fondo, la pelea en “la U” es un conflicto enderezado a definir qué sector político es el hijo legítimo de Uribe y cuál es el heredero del capital político del Presidente, teniendo en cuenta que éste aglutina a ambos sectores políticos.

Como hemos visto, el actual gobierno logra vincular a diferentes sectores de la dirigencia política colombiana en torno a su proyecto político. Sin embargo, el forcejeo en los mandos de “la U” revela que la fractura entre élites capitalinas y provinciales está lejos de soldarse.

En todo caso, ante el descrédito de los partidos tradicionales, los dos sectores de la puja interna beben el agua de la misma fuente: el éxito electoral de Uribe. Una encuesta revelada en el mes de junio por El Espectador señalaba que apenas el 10% de los encuestados confía en los partidos, mientras más del 80% simpatiza con el Presidente.¹¹ Como bien lo advirtiera el político liberal Rafael Pardo, “uribismo sin Uribe es como el café sin cafeína o el azúcar sin sacarina”.¹²

¹⁰ El Tiempo, 28 de julio de 2008, pag 1-6.

¹¹ El Espectador 01/06/08. pag 55

¹² El Nuevo Siglo 23/06/08 Pag A8, A9